

Autoridades piden al Gobierno igual trato en el Plan de Calles sin Violencia

DELINCUENCIA. *El llamado es a no dejar la zona como "el patio final" e incrementar el personal policial en comunas donde opera la iniciativa.*

Daisy Castillo T.
 ciudades@mercurio.cl

La puesta en marcha de la segunda fase del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana y que implica el reforzamiento policial en el control preventivo con 1.669 funcionarios, de los cuales 909 serán nuevos efectivos, encendió la alerta entre las autoridades de la Región de Valparaíso. En forma transversal piden al Gobierno un trato igualitario con la zona, en la que también existen casos complejos de asaltos, robos y homicidios.

Hay que recordar que el reforzamiento en la Región Metropolitana del Plan Calles sin Violencia se debe a una serie de asesinatos ocurridos en el fin de semana de mediados de julio, lo que causó impacto.

Actualmente, esta iniciativa se aplica en la zona en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena y Quilpué.

REACCIONES DE EDILES

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, indicó que "existe un déficit de dotación policial de al menos 30% que se arrastra desde el gobierno anterior. Esto en concreto se nota en las

"Valparaíso no puede tener un trato distinto a Viña del Mar, Concón, Reñaca o Las Condes".

Jorge Sharp
 Alcalde de Valparaíso

"Enviaré un oficio para conocer aquellos criterios para decidir que no llegaran de esos más de 1.200 funcionarios de Carabineros a Viña del Mar".

Macarena Ripamonti
 Alcaldesa Viña del Mar

comisarias, subcomisarias o retenes que hay en nuestros barrios, donde la falta de Carabineros es pan de cada día. Al igual que en la Región Metropolitana, el Plan Calles sin Violencia debe extenderse a toda la Región de Valparaíso, el delito es móvil, se mueve de una comuna a otra, no existen fronteras que lo limiten".

Añadió que "Valparaíso no puede tener un trato distinto a Viña del Mar, Concón, Reñaca, Las Condes, Vitacura o Provi-

dencia, todos los ciudadanos tienen derecho a la seguridad, a vivir sin violencia y en paz, y es deber del Estado garantizar aquello".

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, enfatizó que "nosotros también queremos que Viña del Mar sea una ciudad segura para vivir, y para eso necesitamos ser considerados en las políticas de carácter nacional y que sobre todo a la hora de hablar de seguridad no exista centralismo. Entendemos que estas decisiones suponen un análisis situacional y de indicadores, pero acá en Viña del Mar tenemos la base económica de la región y es la comuna con mayor concentración de habitantes. Además, tenemos una presión muy importante, también, por la cercanía con Santiago".

La autoridad adelantó que "enviaré un oficio con el objeto de poder conocer aquellos indicadores y criterios que fueron tomados a la hora de decidir que no llegaran de esos más de 1.200 funcionarios de Carabineros a Viña del Mar".

PROFUNDIZAR EL TRABAJO

Para la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melpillán, "esta segunda etapa del Plan Calles sin Vio-



MAYOR PRESENCIA POLICIAL ES LO QUE DEMANDAN AUTORIDADES LOCALES.

30% es el déficit de dotación policial que existe en la comuna de Valparaíso, según informó Jorge Sharp.

lencia nos pone también en alerta en la Región de Valparaíso, donde hay comunas que también formamos parte de la primera etapa de este plan y necesitamos que se continúe profundizando el trabajo acortando las brechas de dotación policial".

Comentó que "sería un error que un plan que ha tenido alcance en regiones se transforme en una política centralista más. Hasta ahora, in-

cluso en la Región, la mayor parte de las acciones se concentran en las comunas más grandes; y una comuna como Quilpué, donde enfrentamos desafíos como tener una de las ferias más grandes del país, por la cual cada sábado transitan más de 20 mil personas, no recibe la atención suficiente. Espero que el Ministerio del Interior impulse una nueva etapa del plan, donde las acciones lleguen a todas las comunas y los resultados satisfagan las expectativas que se generaron en la ciudadanía".

El concejal porteño Dante Iturrieta (UDI) expuso: "Siento que, lamentablemente, Santiago es Chile y los recursos para

las regiones siempre deben esperar o pasar a segundo plano. Es más, siento que la aplicación del plan en nuestra comuna no tuvo el efecto esperado, manteniendo los índices de inseguridad y también los índices delictuales".

El concejal viamarino René Lues (DC) comentó que "no hay que dejar de lado a regiones, como la nuestra, que son vecinas a la capital y donde se trasladan los delincuentes cuando son hostigados y perseguidos en Santiago, sobre todo si vemos que en la Región de Valparaíso se encuentra uno de los puertos terrestres y los dos puertos marítimos más importantes del país".

Advertió que "la mirada en seguridad no puede ni debe ser de límites geográficos de una determinada comuna o región, sino que debe abarcar grandes zonas territoriales, consideradas de manera más integral, para que la lucha contra el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado sea más potente y eficaz".

John Byrne, consejero regional de Valparaíso, afirmó que "se necesita una base única de registro biométrico que sea compartido por Carabineros, PDI, Aduana, Policía Marítima, Ministerio Público y Registro Civil. Los delincuentes saben que los sistemas de los policías no hablan entre sí y ocultan su identidad, permitiendo quedar como primerizos frente a los tribunales".